



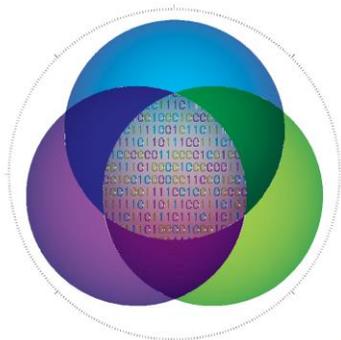
Al servicio
de las personas
y las naciones

Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2017 del PNUD Argentina *Información para el desarrollo sostenible. Argentina y la Agenda 2030*

Este Informe presenta un panorama de la situación de Argentina en las tres dimensiones principales del desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental. Analiza la posición relativa de Argentina en los principales índices mundiales de desarrollo, y elabora un Índice de Desarrollo Sostenible Provincial. Releva la disponibilidad, accesibilidad y calidad de la información necesaria para el monitoreo de las metas de la Agenda 2030, nueva agenda de desarrollo de las Naciones Unidas. Analiza la estructura y funcionamiento del Sistema Estadístico Nacional. Diagnostica la situación y las potencialidades de Argentina en el uso de Datos Masivos (*Big Data*) y Datos Abiertos (*Open Data*). Introduce el concepto de políticas basadas en la evidencia, y presenta métodos experimentales para diseñar y evaluar políticas públicas.

Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo en Argentina

**Información
para el desarrollo
sostenible: Argentina
y la Agenda 2030**



Informe Nacional
sobre Desarrollo Humano 2017



Al servicio
de las personas
y las naciones

Representante Residente del PNUD y Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina

René Mauricio Valdés

Representante Residente Adjunto

Benigno Rodríguez

Directores del Informe Nacional sobre Desarrollo Humano

Gabriela Catterberg y Ruben Mercado

Comité Consultivo

Gabriela Agosto, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

Cristina Calvo, ex Directora de Inclusión y Desarrollo Humano del Ministerio de Hacienda

Leandro Despouy, ex Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Representante Especial para los Derechos Humanos en el ámbito internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Ana Falú, Directora del Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat de la Universidad Nacional de Córdoba, Presidenta del Centro de Intercambios y Servicios Cono Sur, y ex Directora Regional del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM)

Esteban Feuerstein, Director Ejecutivo de la Fundación Sadosky, y Profesor y ex Director del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires

Bernardo Kosacoff, Profesor Titular de Desarrollo Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Miembro del Comité Ejecutivo de la Universidad Torcuato Di Tella, y ex Director de la de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires

Diego Moreno, Secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y ex Director General de la Fundación Vida Silvestre Argentina

Jorge Todesca, Director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

La información en la nueva agenda de desarrollo mundial

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es la nueva agenda de desarrollo de las Naciones Unidas. Su idea central, el desarrollo sostenible, es la articulación virtuosa entre el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Es una agenda transformativa que presenta 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).¹ Para alcanzarlos, los países deben atender una demanda insoslayable: la necesidad de contar con más y mejor información; confiable, oportuna y accesible; que permita desarrollar nuevos indicadores e índices de medición de líneas de base y brechas de desarrollo; que facilite el monitoreo y la evaluación de impactos de los proyectos y programas para rendir cuentas sobre los avances en el logro de objetivos y metas; y que alimente la formulación de estrategias y políticas basadas cada vez más en la evidencia. Este informe parte de esta demanda.

Argentina: la información del desarrollo sostenible

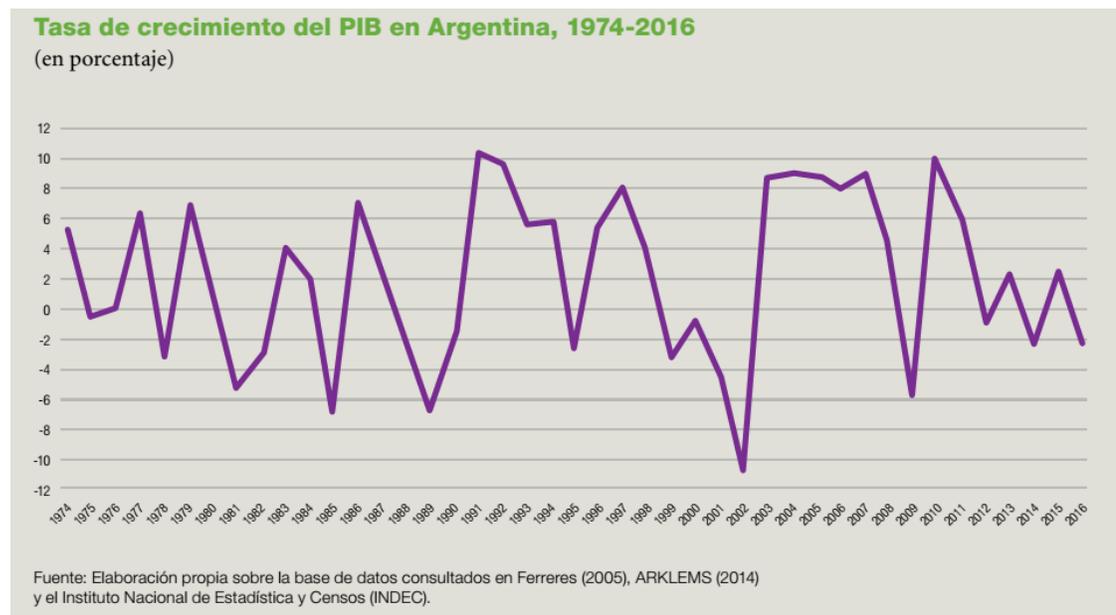
Argentina en tres dimensiones

¿Es sostenible el desarrollo de la Argentina?

La Argentina de hoy muestra luces y sombras que impulsan a explorar senderos posibles para encarar una dinámica de desarrollo sostenible.

En la dimensión del crecimiento económico, Argentina cuenta con una importante acumulación de capital humano; un sector agropecuario moderno y productivo; un sector industrial heterogéneo, con industrias de punta que coexisten con un amplio

sector informal de pequeñas empresas muy poco competitivas, y un sector de servicios también heterogéneo, compuesto por segmentos de alta productividad y otros en que la productividad es muy baja. Ello se traduce en la conformación de mercados de trabajo caracterizados por un alto nivel de precariedad e informalidad laboral. Desde hace ya varias décadas, la



macroeconomía presenta una elevada volatilidad, con períodos de aceleración seguidos de recesiones o de crisis profundas, que redundan en una tasa de crecimiento promedio menor que la potencial. Asimismo, la infraestructura presenta cuellos de botella que también restringen el crecimiento, y que especialmente se relacionan con la existencia de un sistema financiero muy poco desarrollado y de carencias en la infraestructura eléctrica, vial y de transporte. Finalmente, la innovación productiva, motor clave del crecimiento a largo plazo, plantea desafíos: si bien el gasto en investigación y desarrollo se ha incrementado, aún dista del alcanzado en economías comparables y en las economías más desarrolladas.

¹ Los ODS son los siguientes: 1. Fin de la pobreza, 2. Hambre cero, 3. Salud y bienestar, 4. Educación de calidad, 5. Igualdad de género, 6. Agua limpia y saneamiento, 7. Energía asequible y no contaminante, 8. Trabajo decente y crecimiento económico, 9. Industria, innovación e infraestructura, 10. Reducción de las desigualdades, 11. Ciudades y comunidades sostenibles, 12. Producción y consumo responsables, 13. Acción por el clima, 14. Vida submarina, 15. Vida de ecosistemas terrestres, 16. Paz, justicia e instituciones sólidas, 17. Alianzas para lograr los objetivos.

En la dimensión de inclusión social, se presenta hoy una situación problemática. En términos históricos, los niveles de pobreza y de indigencia son muy altos (30,3% y 6,1% respectivamente en el segundo semestre de 2016 de acuerdo al INDEC), con un piso

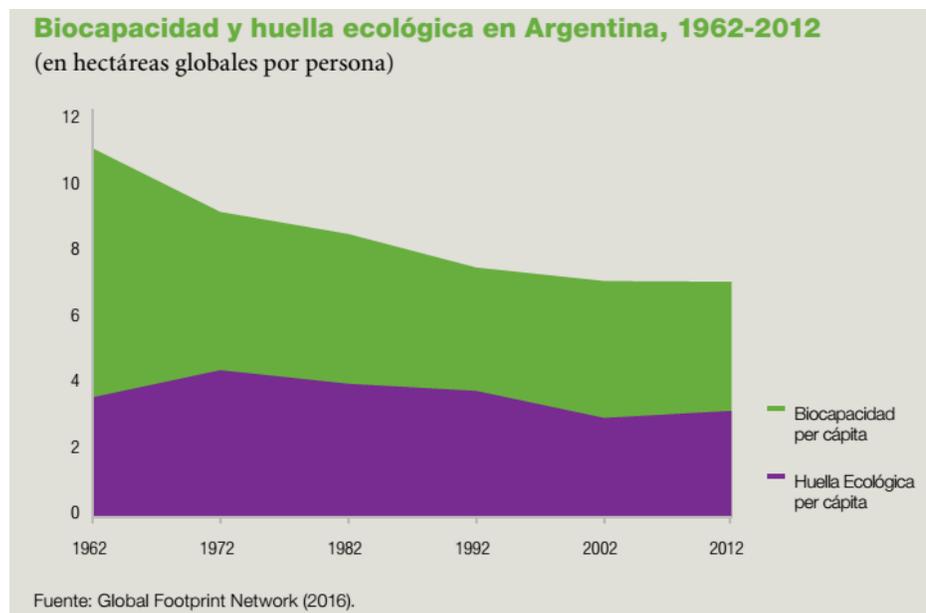


promedio superior al 20% en los últimos 25 años, que es indicativo de la conformación de un núcleo duro de pobreza. Respecto a la salud, la situación epidemiológica es dual, pues enfermedades transmisibles y altas tasas de mortalidad materna (típicas de los países subdesarrollados) coexisten con enfermedades no transmisibles (típicas de los países desarrollados), mientras que el sistema de salud es

universal pero presenta circuitos diferenciados de calidad. El sistema educativo presenta problemas similares en cuanto a la fragmentación y la diferenciación de circuitos según calidad. Asimismo, si bien las tasas de matriculación son elevadas, la situación es particularmente seria en la tasa de graduación de la escuela secundaria. La desigualdad en la distribución del ingreso tendió a revertirse en los últimos lustros luego de la crisis de 2001-2002, pero todavía se está lejos de alcanzar los niveles de igualdad característicos del país hasta mediados de la década de 1970. Asimismo, a pesar de haberse registrado avances importantes en el ámbito de la educación en términos de igualdad de género, persisten desigualdades importantes en la brecha de ingresos, la distribución del uso del tiempo, el acceso a puestos de decisión y la violencia contra las mujeres. Finalmente, si bien Argentina es un país eminentemente urbano, presenta un importante déficit de vivienda, y síntomas preocupantes de segregación residencial entre barrios cerrados en que viven sectores de altos ingresos y villas miseria y asentamientos irregulares. A su vez, la inseguridad es un tema prioritario para la población, mientras que el acceso a la justicia presenta

falencias, en especial entre los sectores más carenciados.

En la dimensión de sostenibilidad ambiental, Argentina posee un territorio muy extenso con una gran biocapacidad y una gran variedad de recursos naturales. No presenta serios problemas de sostenibilidad del desarrollo derivados de su balance macroambiental, dado que la huella ecológica se ha mantenido siempre muy por debajo de la biocapacidad del país, aunque esta última tiende a reducirse. Sin embargo, se evidencian problemas de contaminación, erosión de los suelos, y pérdida de bosques y de biodiversidad. Las emisiones de gases de efecto invernadero provienen principalmente de la energía, los



cambios en los usos del suelo (principalmente, el preocupante avance de la frontera agrícola a través de intensos procesos de deforestación), la agricultura y la ganadería. Las consecuencias en términos del cambio climático se manifiestan en alteraciones de la temperatura y del patrón de precipitaciones, que a su vez suponen el incremento del riesgo de desastres naturales, principalmente por inundaciones. Por su parte, la creciente generación de residuos sólidos urbanos no se traduce proporcionalmente en la mejora de los métodos para su disposición y tratamiento.

La Agenda 2030 es un desafío y una oportunidad para abordar sistemáticamente las problemáticas que enfrenta Argentina a nivel económico, social y ambiental. Sus objetivos, metas e indicadores brindan una matriz para orientar la formulación, implementación y monitoreo de estrategias de desarrollo sostenible que supongan soluciones integradas para los múltiples problemas que se han identificado, de modo que el país pueda desplegar plenamente su potencial de crecimiento económico, avanzar con decisión en materia de inclusión social y progresar en su sostenibilidad ambiental.

Argentina en los índices de desarrollo

¿Cómo están la Argentina y las provincias en los rankings de desarrollo?

Entre los índices para medir el desarrollo de los países, se destacan el PIB, el IDH y el IODS. Con un PIB per cápita de 12.622 dólares en 2015, Argentina ocupa el puesto 51 entre un total de 183 países en el *ranking* del Banco Mundial. De acuerdo al IDH computado por el PNUD en el Informe sobre Desarrollo Humano de 2016, el país ocupa el puesto 45 entre un total de 188 países. Y de acuerdo al Índice de Objetivos de Desarrollo Sostenible calculado por la Sustainable Development Solutions Network en 2016, ocupa el puesto 43 entre un total de 149 países.

IDSP en Argentina por jurisdicción

Jurisdicción	IDSP	Ranking
CABA	0,792	1
Chubut	0,595	2
Mendoza	0,588	3
San Luis	0,579	4
Neuquén	0,571	5
Santa Cruz	0,567	6
Entre Ríos	0,565	7
Río Negro	0,564	8
Buenos Aires	0,556	9
Santa Fe	0,553	10
Misiones	0,550	11
San Juan	0,548	12
Tierra del Fuego	0,545	13
Córdoba	0,541	14
Catamarca	0,537	15
La Rioja	0,536	16
Tucumán	0,535	17
La Pampa	0,524	18
Jujuy	0,517	19
Corrientes	0,467	20
Salta	0,464	21
Formosa	0,451	22
Chaco	0,436	23
Santiago del Estero	0,313	24
Total del país	0,570	

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Índice de Desarrollo Sostenible Provincial (IDSP).

Los índices nacionales caracterizan la situación relativa de Argentina a nivel internacional. Para tener una primera aproximación al grado de desarrollo sostenible de las provincias y su posición relativa dentro del país, el PNUD Argentina ha construido un Índice de Desarrollo Sostenible Provincial (IDSP). Este índice se compone de variables que apuntan a capturar la dimensión del crecimiento económico (ingreso per cápita y capital humano), la inclusión social (pobreza relativa, empleo formal e informal, salud y educación) y la sostenibilidad ambiental (emisiones de gases de efecto invernadero, y generación y disposición de residuos).

El IDSP puede tomar valores entre 0 y 1. Cuanto más cercanos a 1, mayor es el nivel de desarrollo sostenible. Por su fórmula de cómputo, el IDSP penaliza el desbalance en el desarrollo y captura la idea de integralidad entre los dimensiones del desarrollo sostenible. Por lo tanto, si en una provincia se experimentan mejoras en las tres dimensiones simultáneamente, el IDSP se incrementará más que si se experimentan mejoras solo en una o dos de las dimensiones.

De acuerdo al IDSP computado en 2016, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabeza el *ranking* provincial y a una distancia considerable de las demás provincias, pues presenta los niveles más elevados en las dimensiones de crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental. Luego se identifica un grupo de provincias cuyo IDSP se encuentra por encima del promedio nacional, compuesto por Chubut, Mendoza, San Luis y Neuquén. Por debajo del promedio nacional se sitúa un grupo numeroso de provincias, compuesto por Santa Cruz, Entre Ríos, Río Negro, Buenos Aires, Santa Fe, Misiones, San Juan, Tierra del Fuego, Córdoba, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes y Salta. Al final del *ranking* quedan tres provincias cuya situación es más crítica: Formosa, Chaco y Santiago del Estero.

A nivel nacional, Argentina enfrenta el desafío de mejorar su situación en los rankings mundiales de desarrollo, transformando su gran potencial en mejores resultados. A nivel subnacional, la construcción del IDSP ha permitido constatar —de forma preliminar, dado que se basa en la información estadística actualmente disponible—

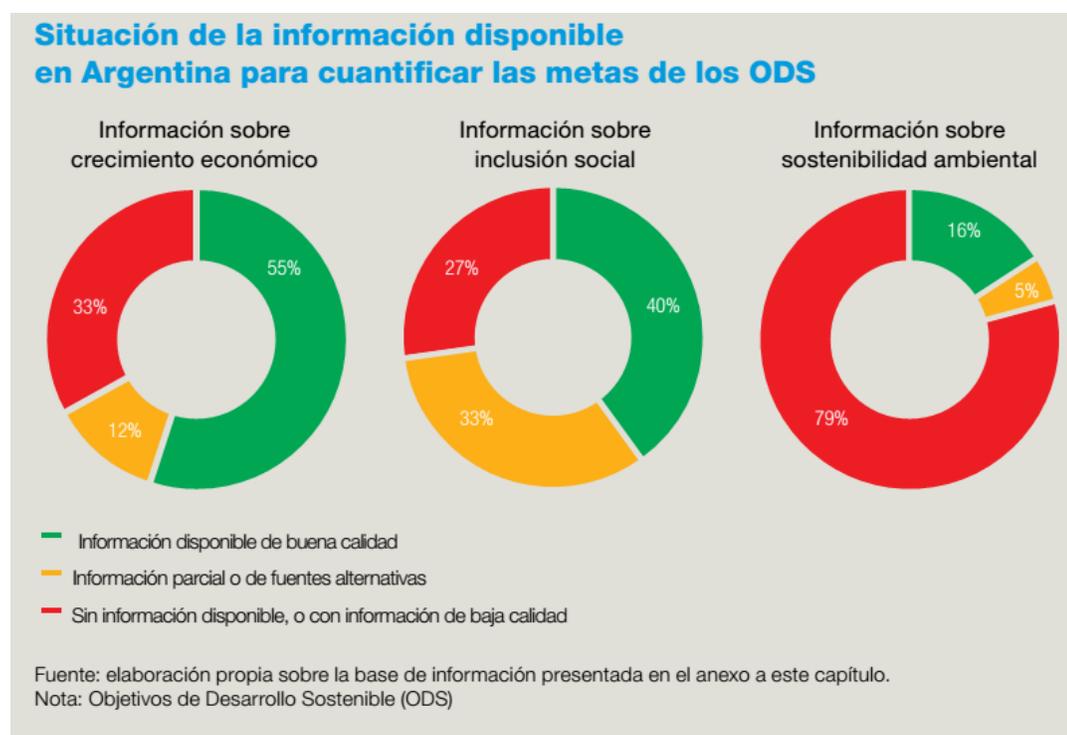
que el desarrollo sostenible se da de manera heterogénea y desigual en Argentina. El desafío es doble: elevar el nivel de desarrollo sostenible de las provincias, especialmente de las más rezagadas, y a la vez hacerlo propendiendo a un balance entre sus tres dimensiones.

El sistema estadístico hoy y mañana

La información estadística convencional y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

¿Cuenta la Argentina con información suficiente para medir y monitorear la nueva agenda de desarrollo sostenible?

La Agenda 2030 plantea demandas significativas en relación a las estadísticas convencionales, ya que establece 231 indicadores para cuantificar y monitorear los avances relativos a las metas de los ODS. Un primer análisis de la situación de la información estadística convencional del país de cara a los ODS, en términos de disponibilidad, calidad y áreas vacantes, muestra que la dimensión de crecimiento económico es la que dispone de la mayor cantidad de información de buena calidad (55% de las metas). Esto se verifica en menor medida dentro de la dimensión de inclusión social (40%), mientras que la de sostenibilidad ambiental, el área relativamente más nueva, es la que presenta menor disponibilidad relativa de información (16%). La heterogeneidad de la situación de las estadísticas convencionales en relación con los ODS no supone la carencia total de información. Hay áreas en que se cuenta con información suficiente, y aun en el caso de las menos desarrolladas existen algunas fuentes oficiales o alternativas que permiten estimar indirectamente algunos indicadores.



Más allá de la especificidad propia de las estadísticas convencionales relativas a cada una de las áreas — económica, social y ambiental—, se impone como desafío avanzar en la compatibilización, articulación e integración de las bases de datos, y definir protocolos de acceso. También es preciso mejorar los principales instrumentos de recolección y sistematización de estadísticas poblacionales, es decir, los censos y las encuestas permanentes de hogares. En cuanto a los censos, sería importante abordar los problemas de desagregación de las unidades territoriales de

análisis, pues la división político-administrativa del territorio argentino y la distribución real de la población y su hábitat se superponen en una trama de divisiones que, además de confundirse entre sí, limitan el análisis de los muchos aspectos del desarrollo sostenible. En cuanto a las encuestas permanentes de hogares, fuente fundamental de información poblacional de alta frecuencia, debería avanzarse hacia una cobertura territorial más exhaustiva, que trascienda la actual focalización en los grandes centros urbanos.

Hacia un sistema estadístico nacional y provincial robusto

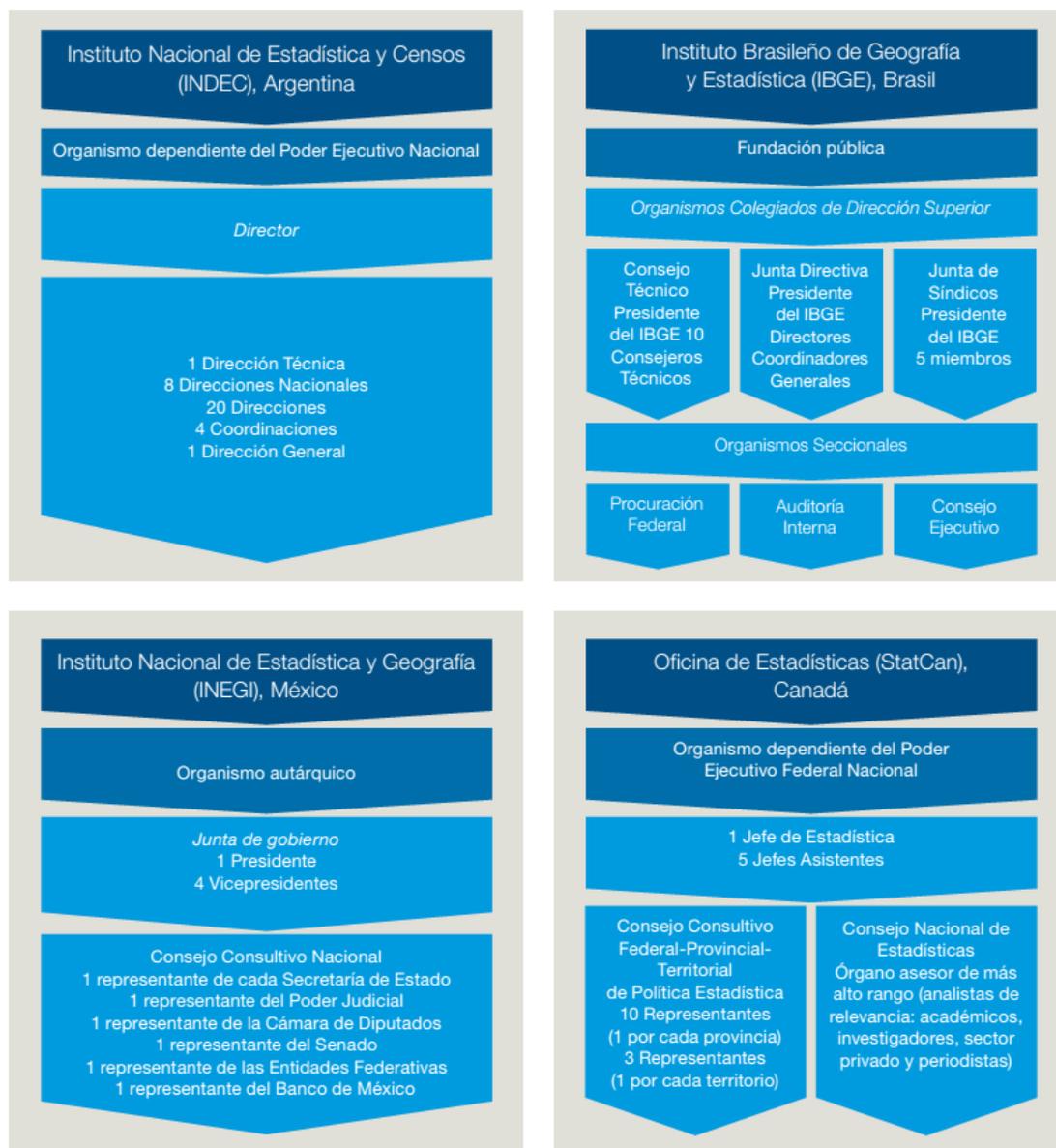
¿Argentina dispone de un sistema estadístico nacional (SEN) acorde a las demandas de la Agenda 2030?

Al SEN de Argentina lo integran diversas instituciones que cumplen diferentes funciones. El INDEC, que es su centro rector; los organismos centrales de estadística, conformados por los servicios estadísticos de los ministerios y las secretarías de Estado, de los comandos en jefe de las Fuerzas Armadas, de los organismos descentralizados de la Administración Nacional y de las empresas del Estado; y los organismos periféricos de estadística, integrados por los servicios estadísticos de los gobiernos

provinciales, los gobiernos municipales, las reparticiones autárquicas y descentralizadas —provinciales y municipales—, las empresas provinciales y municipales, y los entes interprovinciales.

El SEN produce una cantidad significativa de información estadística. A través del INDEC, se realizan censos, encuestas y relevamientos de muy diverso tipo, y se sistematiza información de otros organismos gubernamentales. Por su parte, las reparticiones provinciales de estadística también generan, aunque en una medida mucho menor, varios tipos de información, y son heterogéneas en cuanto a su producción, los recursos presupuestarios de que disponen, la organización que adoptan y la dependencia institucional que les corresponde dentro de las estructuras estatales provinciales.

Formas de gobierno de los institutos de estadística de Argentina, Brasil, México y Canadá



Fuente: Elaboración propia.

La forma de gobierno y de inserción institucional del INDEC también contrasta con la de sus homólogos de Brasil, Canadá y México. Estos son, en general, más autónomos, y sus instancias de gobierno son más participativas.

La experiencia internacional muestra que no hay un único arreglo institucional válido para garantizar la producción de estadísticas confiables. Sin embargo, es crucial garantizar características esenciales de la producción de estadísticas, a saber: independencia, relevancia, integridad, credibilidad, calidad, coherencia, protección y accesibilidad de la información recopilada. En ese sentido, es preciso continuar avanzando hacia la incorporación de las recomendaciones de buenas prácticas de la OCDE, y

La necesidad de expandir, mejorar y coordinar la generación de estadísticas, así como la producción de nuevos indicadores de desarrollo sostenible, plantea desafíos a los sistemas estadísticos nacionales. La situación del SEN de Argentina, y, en particular del INDEC, contrasta con la de otros sistemas estadísticos de naturaleza federal, como los de Brasil, Canadá y México. En comparación con el SEN de Argentina, estos sistemas cuentan con una cantidad significativamente mayor de recursos presupuestarios. Así, en 2014 el presupuesto correspondiente al INDEC fue de 60,8 millones de dólares, equivalente a 1,4 dólares por habitante, en tanto que en el caso del StatCan de Canadá el presupuesto fue de 14,0 dólares por habitante, es decir diez veces superior al de Argentina.

debatir sobre la necesidad de definir una nueva arquitectura institucional del SEN, que cuente con más recursos presupuestarios, mayor autonomía y participación de actores clave.

Nuevos datos para nuevas políticas

Usos de datos masivos y datos abiertos

Estamos frente a una revolución de los datos: ¿sabremos aprovecharla para avanzar hacia un desarrollo sostenible?

Vivimos una revolución de los datos que supone procesos múltiples y contemporáneos que redefinen la concepción tradicional de la información estadística. Esta revolución tiene dos aspectos clave: los datos masivos (*big data*) y los datos abiertos (*open data*). Datos masivos son aquellos cuya generación, dimensión y complejidad amplían significativamente las formas tradicionales de almacenamiento y procesamiento de la información. Datos abiertos son aquellos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona. Los datos masivos podrían contribuir a ampliar significativamente el universo de información disponible para la construcción de indicadores de los ODS y sus metas, mientras que los datos abiertos podrían contribuir sustantivamente a un mejor monitoreo ciudadano de los avances de la Agenda 2030.

En Argentina ha habido avances en el sector de *software* y de servicios informáticos, y se han desarrollado capacidades para aprovechar los datos masivos. Sin embargo, los estudios exploratorios, como la Encuesta Big Data 2014, evidencian cierta desconexión entre los desarrollos de las instituciones científicas y los de las empresas locales, y revelan una menor participación del sector público. Por otra parte, hay en Argentina numerosas áreas potenciales de aplicación que se vinculan directamente con diversos ODS, por ejemplo, en salud y biotecnología, en transporte y urbanismo, en productividad agrícola, en energía, en cambio climático y en ecosistemas marinos.

Los desafíos que enfrenta el sector público para usar inteligentemente los datos masivos se centran en: i) el rol del Estado como dinamizador de las actividades relacionadas con la captura, el procesamiento y el análisis de los datos digitales; ii) el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones, y la definición de su distribución y alcance geográfico, y iii) el desarrollo de las competencias de los trabajadores especializados (por ejemplo, los “científicos de datos”). Un punto que merece especial atención son las instituciones y el marco legal, especialmente la regulación y el resguardo de los derechos de los individuos, que podrían verse afectados por el uso de los datos personales.

A su vez, los datos abiertos facilitan el acceso de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil a la información pública. Sin embargo, constituyen un gran recurso que todavía no ha sido explotado en toda su potencialidad en Argentina. El *ranking* de 2015 del estado de los datos abiertos a nivel mundial (Índice de Datos Abiertos) muestra un desempeño regular del país. Un desempeño análogo resulta de la evaluación que el Barómetro de Datos Abiertos realiza en 2014 sobre la relevancia y el impacto de las iniciativas de datos abiertos en el país. Pero hay avances recientes, entre los que destaca la aprobación, en septiembre de 2016 y luego de 15 años de debates, de la Ley 27.275 sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública.

Para avanzar en el ámbito de los datos abiertos se requiere superar la fragmentación de los datos que producen diferentes jurisdicciones, niveles y ramas del gobierno mediante la creación de archivos estandarizados de fácil acceso.

Nuevas prácticas de evaluación: métodos experimentales para políticas públicas

¿Cómo diseñar y evaluar políticas para el desarrollo sostenible?

De la Agenda 2030 se deriva la necesidad de que las políticas públicas se fundamenten cada vez más sistemáticamente en la determinación cuantitativa de efectos directos e indirectos de las políticas, y el establecimiento de compensaciones (*trade-offs*) y complementariedades entre sus objetivos, metas e instrumentos. Estos elementos son esenciales en las que se conocen como “políticas basadas en evidencia”, que contrastan con las “políticas basadas en opiniones”. El uso de evidencia empírica y métodos sistemáticos para la formulación y evaluación de políticas no podría *per se* eliminar diferencias ideológicas o políticas, pero contribuiría sustantivamente a elevar el nivel del debate y a mejorar la efectividad de las políticas públicas.

Un área de frontera de las políticas basadas en evidencia es la de las políticas experimentales, en particular las basadas en experimentos aleatorios de campo y en métodos computacionales. Los experimentos aleatorios de campo, mayormente utilizados a nivel micro para evaluar la efectividad de proyectos y programas, asignan aleatoriamente individuos de una población objetivo a un grupo de tratamiento (es decir, un grupo que es incluido en el programa) y a un grupo de control

(temporariamente excluido del programa), y evalúan sistemáticamente las diferencias entre los resultados de cada grupo, de modo de identificar el efecto causal del programa y determinar su magnitud. En caso de tener efectos positivos y significativos, el programa se puede hacer extensivo a toda la población objetivo. El uso de experimentos aleatorios de campo en países en desarrollo cobró fuerza a partir de la fundación en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) del Laboratorio de Acción contra la Pobreza Abdul Latif Jameel (J-PAL) en 2003. De un total de 123 evaluaciones realizadas por J-PAL en América Latina y el Caribe, solo seis se hicieron en Argentina.

Los experimentos computacionales, principalmente utilizados a nivel macro, sirven para analizar los efectos de diferentes escenarios, en los que una o más políticas se modifican. Su núcleo central lo constituye un modelo computacional en el cual se representan las variables, los parámetros y las diversas interacciones del sistema económico, social o ambiental cuyo

comportamiento se trata de analizar mediante simulaciones computacionales. Existen en Argentina algunos modelos computacionales desarrollados a nivel de esfuerzos de investigadores individuales, pero su desarrollo sistemático y continuo en ámbitos institucionales públicos es casi nulo.

En síntesis, la aplicación de métodos experimentales en Argentina, ya sea mediante experimentos aleatorios de campo o por medio de experimentos computacionales, es sumamente escasa. Además, las normativas y las instituciones existentes se orientan primariamente al control del gasto público o al control de gestión, pero no se enfocan en la evaluación continua y sistemática de los resultados de las políticas, los programas y los proyectos públicos.

La mayor parte de los avances relativos se registran en el terreno de la evaluación de las políticas sociales donde destacan el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y, dentro de este, el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO). Asimismo, en el último lustro diversos proyectos de ley han impulsado la creación de una Agencia Nacional de Evaluación.

Los principales desafíos para mejorar la formulación y la evaluación de las políticas públicas son los siguientes: i) incorporar progresivamente métodos de frontera, como los experimentos aleatorios de campo y los experimentos computacionales; ii) construir una institucionalidad que de manera unificada y sistemática monitoree y evalúe las políticas desde una perspectiva de desarrollo sostenible, y iii) enfatizar la necesidad de que los planes, programas y proyectos consideren la evaluación desde su diseño, de

modo que una cultura de formulación y evaluación de políticas basadas en evidencia se extienda en el sector público argentino. Ello contribuiría significativamente al logro efectivo de los objetivos planteados en la Agenda 2030.

Políticas basadas en evidencia

